

RUC: 2200751807-6

RIT: 2-2024

Receptación de vehículo motorizado.

Santiago, treinta de enero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

PRIMERO: Tribunal e intervinientes.

Que, ante la sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, presidida por la jueza doña **MARLENE LOBOS VARGAS** e integrada por la jueza **MARCELA NILO LEYTON** y el juez **EDUARDO GALLARDO FRIAS**, el día veinticinco de enero del año en curso se verificó el juicio oral seguido contra el siguiente acusado:

JUAN LORENZO VARGAS ARIAS, cédula de identidad N° el 21011268-5, nacido tres de mayo de 2002, 21 años, soletero, domiciliado en Avenida Recoleta, calle Rawson 559.

En representación de Ministerio Público compareció el fiscal **Ricardo Peña Fighetti**, en tanto por el imputado lo hizo el defensor penal público **Gustavo Valenzuela Rojas**

SEGUNDO: La acusación formulada por el Ministerio Público fue la que a continuación se transcribe literalmente:

1.- HECHOS.

"El día 3 de agosto de 2022, alrededor de las 22:35 horas, en la vía pública, funcionarios de carabineros en av. san Martín esquina caletera Vespucio dirección oriente, comuna de Quilicura, observaron al vehículo marca Chevrolet, modelo Sail, color rojo, con cuatro individuos en su interior, el cual lo hacía a alta velocidad y con peligro de accidente, ante tal situación procedieron a darle alcance en Vespucio norte dirección oriente a la altura del nudo Quilicura con la finalidad de verificar la placa patente siendo la CZWS-45, la que fue consultada a la central de comunicaciones cencco en donde manifiesta que dicho vehículo mantiene un encargo vigente nro. sebv_202208_0543 por el delito de robo con intimidación de fecha 02.08.2022, iniciando un seguimiento a distancia solicitando cooperación a los demás dispositivos y a la vez indicando en todo momento vía radial por donde se desplazaban, momento en los cuales los sujetos se percatan la presencia policial aumentando la velocidad sumándose al seguimiento el rp-5121, para luego dicho vehículo salir de la autopista en dirección guanaco al sur. Posteriormente, doblan en Urmeneta dirección poniente y luego toman general Gambino esquina rio madeira. comuna de Conchalí. Instantes que los sujetos detienen el vehículo para luego descender y darse a la fuga corriendo. procediendo de igual forma a descender del vehículo dándole alcance a dos de ellos en la misma intersección siendo el conductor identificado como Elián Alexander López Zúñiga al cual desde su pretina del pantalón del costado derecho se le incauto 01 revolver a fogueo. marca olympic. calibre 380/9mmk. el cual revisado se logra establecer que dicha arma se encuentra con su cañón liberado apto para realizar el ciclo del disparo. en tanto uno de los que iba en el asiento trasero fue identificado como Ian Vicente Pardo Sepúlveda. c/i: 23.005.881-4 de solo 13 años. además, el subteniente Benjamín Lagos Cádiz. que se desplazaba en el rp-5121. procede a la

detención del copiloto identificado como Juan Lorenzo Vargas Arias y al segundo que de igual forma se encontraba en el asiento trasero siendo identificado como Martin Alfredo Cádiz flores”.

Que a juicio del Ministerio Público, los hechos descritos son constitutivos de un delito Receptación de vehículo motorizado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del código Penal, delito que se encuentra en grado de desarrollo consumado, delito que se encuentra en grado de desarrollo consumado, correspondiéndole a los acusados participación en calidad de AUTOR, conforme lo dispone el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Que a juicio del Ministerio Público, respecto de la acusado JUAN LORENZO VARGAS ARIAS, cédula de identidad N°21011268-5, concurre circunstancia modificatoria de responsabilidad penal del artículo 11 n°6 del Código Penal y respecto de don MARTÍN ALFREDO CADIZ FLORES, cédula de identidad N°22179288-2, no concurren circunstancias modificatoria de responsabilidad penal.

Que según el ente persecutor en la especie, son aplicables al caso los artículos: Artículos 1, 3, 7, 11 N° 6, 12 N° 16, 14, 15 N° 1, 21, 24, 29, 30, 50, 67, 68, 456 bis A del Código Penal, artículos 45, 248, 259, 260 y siguientes del Código Procesal Penal, artículo 2°, 3°, 9° y 13 de la ley 17.798, artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 y 26 de la Ley N°20.084.

- Pena Requerida:

El Ministerio Público solicita imponer al acusado Juan Lorenzo Vargas Arias la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, multa de 10 UTM, más accesorias del artículo 29 del Código Penal, por el delito de receptación de vehículo motorizado y a don Martin Alfredo Cádiz flores, La sanción de 541 días de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social por el delito de receptación de vehículo motorizado. Asimismo, se solicita las costas del caso, según lo prescrito en los artículos 45 y siguientes del Código Procesal Penal y el comiso de la especie incautada.

TERCERO: Alegatos de apertura.

El **fiscal** manifestó que se acreditarán los hechos de la acusación y la participación del acusado con la prueba de cargo.

La **defensa** expuso que pedirá la absolución, pues no se configuran los elementos del tipo penal, concretamente que el acusado haya estado en posesión del vehículo, pues éste no lo conducía. No tenía el vehículo en su poder. Tampoco se verifica el elemento subjetivo en el sentido de que tuviera conocimiento de que el vehículo fuera robado.

CUARTO: Declaración del acusado.

Expuso que el día de los hechos estaba con un amigo en la población Santa Mónica en Conchalí, y llegaron con Martin Cádiz en un auto pasándolo a buscar para ir comer a un local en Quilicura. No sabía que el auto era robado, porque a lan (quien tenía 13 años) sus padres que trabajan en la feria siempre le pasaban vehículos. Fueron a comer y cuando venían de vuelta se les “pegaron” los carabineros y se dieron a la fuga. Dejaron el auto estacionado y

cada uno corrió por su lado, al acusado lo pillaron en la casa de Martín Cádiz, de ahí lo sacaron los policías. Ahí Ian les dijo que era robado el auto, tenía las llaves puestas. Él estaba con su amigo Elián López. Martín venía de copiloto e Ian manejaba. Les dijeron que el auto era de la familia. En acusado se sentó atrás junto a Elián. Pero al regreso Elián le pidió a Ian manejar, aunque tampoco sabía que el auto era robado. Era un auto rojo.

Al **fiscal** dijo que Ian tenía 13 años en esa época, venía manejando, le pregunto si era robado el auto. Le preguntó porque “uno nunca sabe”. No le llamó la atención que anduviera manejado. El revolver lo tenía Ian, pero después se dieron cuenta, cuando lo llevaron a comisaría. Culparon a Elián por eso.

QUINTO: Alegatos de clausura.

El **fiscal** expuso que no es verosímil que todo sea culpa de Ian que tiene 13 años: él iba manejando, tenía el arma, etc. Los demás, no hicieron nada, pero el propio acusado que le preguntó a Ian si el vehículo era robado, por lo cual al menos se representó dicha posibilidad. Además, el imputado fue detenido en el asiento del copiloto, lo corroboró el funcionario Lagos, por lo que estaba en poder de un vehículo robado.

La **defensa** reiteró su petición de absolución, pues la escasa prueba estatal no derribó la presunción de inocencia. Faltó el elemento objetivo (porte) y el elemento subjetivo (conocimiento del origen ilícito del vehículo). El Carabinero Vargas no es preciso en los hechos, no recuerda la fecha la placa patente del vehículo. Tampoco recuerda si el acusado entró a un inmueble cuando lo perseguían.

SEXTO: Cuestiones fácticas a probar y su relación con los tipos penales.

En relación con el caso *sub lite* el hecho contenido en la acusación supone establecer los presupuestos fácticos y normativos del delito de receptación de vehículo motorizado. En sede de tipicidad objetiva, es condición *sine qua non* que el sujeto activo del delito **tenga en su poder a cualquier título especies hurtadas o robadas, en el caso que nos convoca, el vehículo singularizado en la acusación**. Luego, es menester que concurren coetáneamente dos elementos adicionales: **primero**; un elemento, también objetivo, consistente en la existencia del delito base, es decir, que el objeto material en que recae la acción de emprendimiento provenga de un delito cuyo perpetrador sea distinto al sujeto activo de la receptación y; **segundo**, el elemento subjetivo, consistente en que el sujeto activo del delito conozca o no pueda menos que conocer tal circunstancia.

El deber de acreditación más allá de toda duda razonable de la hipótesis imputativa por parte del acusador debe verificarse precisamente en relación con los elementos fácticos concretos contenidos en la acusación, los cuales están indisolublemente conectados con las premisas fácticas referidas a la temporalidad, conductas específicas, espacio y contexto de la imputación. Luego, esas premisas fácticas deben ser susceptibles de subsumirse en los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal conforme al mandato de taxatividad consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso final de la Constitución Política de la República. Es decir, la actividad probatoria de la parte acusadora debe inequívocamente dirigirse a la corroboración del núcleo fáctico de la acusación, transcrito literalmente en el motivo segundo de esta sentencia. Lo que se viene explicando es lo que permite satisfacer la irreductible exigencia del artículo 342 del Código Procesal Penal en orden a que la sentencia, en caso de ser condenatoria, establezca con claridad los

hechos que se dan por probados en el juicio y que sirven de base a una condena, vinculando tales hechos con los medios de prueba que sirvieron para acreditarlos. Y ello, aunque resulte evidente, es lo que orienta, delimita, condiciona y determina la actividad probatoria de la hipótesis acusatoria y el subsecuente control epistémico que de dicha actividad deben realizar los adjudicadores en la esfera de la valoración probatoria.

SEPTIMO: Análisis de la prueba de cargo, declaración del acusado y justificación de decisión condenatoria.

Tal como se adelantó en el veredicto de fecha veinticinco de enero del año en curso, por unanimidad, este Tribunal, consideró que la **prueba rendida por el Ministerio Público resultó suficiente para condenar por el delito materia de la acusación al acusado Juan Lorenzo Vargas Arias.**

En el contexto descrito y para efectos metodológicos, es relevante dar cuenta de algunas cuestiones pacíficas o no controvertidas. Ello, con la finalidad de acotar la controversia sometida a consideración del tribunal, lo cual no implica dispensar a estos jueces del deber de motivación; ***proposiciones fácticas que se derivan, además, de la prueba rendida en el juicio y que a continuación someramente se valora y asocia a dicha premisas:***

1.- En primer término, quedó meridianamente establecido en el juicio que el día tres de agosto de 2022, a las 22:30 horas aproximadamente, en la intersección de la intersección de calles Urmeneta con Lago Madeira en Conchalí, el imputado Vargas Arias fue detenido por funcionarios policiales, luego de que se diera a la fuga al estar circulando junto a otros tres sujetos al interior del vehículo marca Chevrolet, modelo Sail, placa patente CZWS-45.

Ello, quedó corroborado con los **dichos en juicio coincidentes en este punto en del propio acusado** y con la declaración del **carabinero aprehensor Benjamín Lagos Cádiz**, quien, con relación a los hechos de la acusación refiere que el 3 de julio de 2022, como a las 22:35 horas realizaba laboras de patrullaje. En ese contexto, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Colina, que andaban de civil en un auto sin logo institucional de Colina, consultaron una patente de un auto al que seguían por la autopista Vespucio Norte, un Chevrolet rojo, la cual se determinó con la llamada a CENCO que tenía un encargo por robo del día anterior. Al llegar a Pedro Fontova al Oriente por Vespucio Norte, el vehículo Chevrolet, explicó el testigo, los sobrepasa a ellos (que lo hacían en un vehículo con logo institucional) en velocidad. Activaron las balizas y sirenas, consultan la placa patente y se confirma el encargo por robo. El Chevrolet salió por Huánuco al Sur y tomó Urmeneta al Poniente y luego General Gambiano al Norte, deteniéndose en Rio Madeira, y bajando quienes se encontraban en su interior. Su patrulla detuvo a dos sujetos y la de personal civil detuvo a otros dos. **Él logró la detención de Juan Vargas Arias y Martin Cádiz. Vargas iba de copiloto y Cádiz en la parte trasera. El funcionario identifica a Vargas en la audiencia.** Ese día, refirió, Vargas Arias iba con polerón negro con rojo, lo que corroboró con al exhibírsele el **set fotográfico número tres de otros medios de prueba, correspondiente a las vestimentas del acusado ese día, identificando en la foto 2, el polerón que vestía el acusado, que es negro con franjas rojas en las mangas**, descartando además que se trata del polerón de la foto uno, que no corresponde al que vestía el acusado.

Lo persiguieron algunos metros antes de detenerlo. Había un menor de edad detenido por la patrulla civil, más o menos en la misma intersección. **El conductor –lograron determinar cuándo se detuvo el vehículo Chevrolet- era**

Elian López, quien portaba un arma de fuego y también detuvieron a un menor de 13 años que iba atrás con otro menor de apellido Cádiz.

La premisa fáctica en comento fue también corroborada con la declaración del funcionario **Francisco Sánchez Zamora**, quien refirió que el tres de agosto de 2022 como a las 22:35 horas, realizaba un patrullaje como funcionario de la SIP, de civil y en auto sin logo institucional. Estaban en el sector de la prefectura norte en el “servicio encerronas” patrullando en la población. En la carretera Vespucio al Poniente en Quilicura, al llegar a calle San Martín, observó un vehículo que llegó aceleradamente al semáforo. Iban cuatro sujetos en su interior y al dar la luz verde salen sorpresivamente al Oriente. Los siguieron para ver la placa patente y consultar por la misma a CENCO. Como iban de civil, los sujetos no se dieron cuenta que eran carabineros. Al logra divisar la placa patente CZWS-45, en CENCO les informan que tenía encargo por robo de 2 de agosto de 2022. Era un Chevrolet rojo, modelo Sail. Prosiguieron con el seguimiento a distancia, y más adelante había un radio patrulla y el Chevrolet sale por Guanaco tomando Urmeneta. El vehículo, explica, se detuvo en Urmeneta con Lago Madeira, se bajan los 4 sujetos. **El testigo detuvo al conductor Elian López Zúñiga, quien tenía un revolver en su cinto. Su acompañante detiene a un menor de 13 años llamado Ian, quien salió por la parte trasera. Los otros dos sujetos (Juan Vargas Arias y Martín) fueron detenidos por la patrulla del subteniente. Los persiguieron como 200 metros a esos sujetos por la intersección. Juan Vargas Arias iba de copiloto.** A los 4 los subieron al carro policial y los llevaron a la Quinta Comisaría de Conchalí.

No recuerda si las personas detenidas por el subteniente ingresaron a algún domicilio, pero lo más probable es que no. Los otros dos sujetos que el testigo no detuvo huyeron en sentido contrario a los sujetos que detuvo Benjamín Lagos. Sin embargo, **vio a Vargas Arias salir del asiento del copiloto.**

Como puede observarse, y más allá de lo dicho por el acusado y de lo cual nos haremos cargo más adelante, en lo nuclear las circunstancias, día y lugar de la detención del acusado Vargas Arias, han quedado refrendadas por la prueba aludida.

2.- Adicionalmente, la circunstancia de que el vehículo tenía un encargo por robo no sólo se estableció con las declaración de los funcionarios policiales mencionados en el apartado anterior que llamaron a CENCO corroborando ese antecedente, sino, además, con la prueba documental, **consistente en la copia del encargo vigente por robo N° SEBV_202208_0543, de 2 de agosto de 2022, a las 22:36 horas, por un delito de robo con intimidación de ese mismo día, a las 21:10 horas.** Dicho documento da cuenta de las circunstancias del robo referidas por la víctima, que refiere que se encontraba trabajando en la aplicación de transporte “Indriver” y, en Zapadores con Javier Solís en la comuna de Conchalí, tres individuos lo intimidan con armas blancas y le roban el vehículo. Adicionalmente, se determinó, sin controversia alguna que dicho vehículo era de propiedad de doña Mónica Cecilia San Martín Arratia. Ello, **con el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo placa patente CZWS-45.**

Lo anterior, además, da cuenta de la existencia del delito base que originó el encargo por robo antes aludido

3- Por último, el objeto material del delito correspondiente al vehículo singularizado en la acusación y en cuyo interior circulaba el acusado junto a otros tres sujetos el día de su detención el tres de agosto de 2022, tampoco fue objeto de controversia alguna. Ello, por lo demás, quedó meridianamente establecido con las declaraciones de los funcionarios aprehensores ya referida, al igual que con el **set fotográfico número dos, de 10 fotografías, en las que**

el funcionario Sánchez Zamora identifica el vehículo recuperado el día de los hechos. En lo pertinente, las fotos 1 y 2 (parte frontal y trasera del vehículo) dan cuenta de que efectivamente, se trata de un Chevrolet rojo modelo Sail, el cual tenía sus placas patentes adosadas, número CZWS-45. Las demás fotografías, correspondientes a la llave del vehículo en el encendido y al detalle del automóvil, y en las cuales no se observan daños, alteraciones ni rotura de chapas, simplemente corrobora que el delito base se trató de un robo con intimidación en el cual, huelga enfatizar, no se ejerce fuerza sobre el objeto material de la sustracción.

Ninguno de los hechos o premisas fácticas referidas ha sido disputado por la defensa. Se trata en definitiva del establecimiento de los elementos objetivos del tipo penal atribuido, **con excepción de la consideración de si el acusado tenía en su poder el vehículo por el sólo hecho de encontrarse en su interior.** Lo otro que ha sido controvertido por la defensa reside **en si se verifica el elemento subjetivo en la especie, es decir, se acaso el acusado conocía o no podía menos que conocer el origen ilícito del vehículo.**

Establecido lo anterior, **con relación al elemento subjetivo es pertinente referirse a la declaración del acusado.** En primer término, la declaración del acusado, si bien resultó relevante en relación con los elementos objetivos del tipo penal al haber éste reconocido haberse encontrado ese día en el lugar y al interior del vehículo del vehículo y las circunstancias de su detención, su explicación o justificación para tal circunstancia no fue ni remotamente acreditada en el juicio. No se aportó ningún antecedente de que pueda configurarse alguna **duda razonable** referida al desconocimiento del acusado sobre el origen del automóvil, pues dicha circunstancia sólo se sostiene en la afirmación inverosímil del propio acusado. Lo cierto es que se trató de un acusado que iba al interior de un vehículo que había sido objeto de un robo con intimidación un día antes y en el que -según sus dichos- un niño de 13 años lo pasa a buscar para llevarlo a comer a una comuna distante del lugar en que se encontraba. ¿No le llamó la atención que un niño de tan escasa edad estuviera conduciendo un vehículo, junto a otros dos sujetos mayores que él? De hecho, el propio acusado refirió que le preguntó al niño si acaso el auto era robado, es decir, al menos le habría llamado la atención tan peculiar situación. Mas inverosímil aún resulta la afirmación de que ese niño (¿de 13 años!) regularmente andaba conduciendo vehículos que sus padres “le pasaban”, por lo cual el acusado no le llamó la atención la situación que el mismo describió. Una hipótesis alternativa a todas luces inusual habría demandado al menos que la defensa asumiera una mínima carga argumentativa, incorporando algún antecedente o prueba que, mas no sea a nivel de duda razonable, otorgara alguna plausibilidad a lo referido por el acusado. Suponiendo que creamos lo que dice el acusado (que lan llegó conduciendo y que después, al regresar a Conchalí este le pasó el auto Elian) **¿es creíble, atendidas las circunstancias descritas, que el acusado no haya podido menos que representarse con un elevadísimo grado de probabilidad que el vehículo en cuyo interior se encontraba provenía de la perpetración de un delito?** La sola pregunta no resiste análisis y, desde luego, la explicación del acusado habría exigido una mínima carga argumentativa y actividad probatoria, que no han sido verificadas en juicio. Todos los antecedentes resumidos proporcionan un contexto fáctico a partir del cual no cabe sino inferir que el acusado en cuestión no podía menos que conocer el origen ilícito del vehículo que el mismo condujo, es decir, obró -en el mejor de los casos- con dolo eventual.

Con relación al **elemento objetivo**, impugnado por la defensa, no se ha controvertido que el acusado estaba al interior del vehículo momentos antes de su detención, huyendo ante la presencia policial. Aquí hay dos cuestiones que deben atenderse. Primero, ¿el acusado iba sentado atrás (como él dice) o, por el contrario, iba de copiloto junto a Elian que conducía? **Lo cierto es que ambos funcionarios policiales son claros en el sentido que Vargas Arias iba de copiloto, sentado al lado del conductor. Así lo refirió el propio funcionario (Lagos Cádiz) que fue quien detuvo al acusado. Ello, de nuevo, incide en lo poco creíble que resulta la afirmación del acusado de que el niño Ian de 13 años haya sido quien condujo en un principio el vehículo.** Al momento de la detención, (según el propio acusado y los funcionarios policiales) era Elian López quien conducía, y atrás iban Ian y Martín Cárcamo. Y es el propio acusado quien señala que su amigo de la infancia era Elian, a quien le encontraron el arma de fuego pero que, el acusado, refiere que era de Ian. Es decir, ha resultado evidente, como afirma el fiscal en su alegato de cierre, que el acusado en su declaración ha intentado desplazar la responsabilidad de todo lo ocurrido en un niño que, por su edad, es inimputable ante la justicia penal. De nuevo, no ha habido ninguna defensa afirmativa orientada a suministrar el más mínimo soporte fáctico a esas afirmaciones del acusado. Pero aun concediendo, para el sólo efecto argumentativo, que al acusado iba sentado en la parte trasera del vehículo al momento de su detención, ¿eso descarta automáticamente que haya tenido en su poder el vehículo robado? La pregunta en cuestión no tiene ni podría tener una respuesta categorial, como sugiere la defensa. De hecho, de ser así, sería irrelevante la concurrencia del elemento subjetivo, pues bastaría con determinar que el agente no conducía para descartar la relevancia penal de su conducta. Dicha respuesta categorial no resiste análisis, pues implicaría en los delitos de emprendimiento dejar fuera del ámbito de la punición hipótesis de intervención criminal claramente punibles. Piénsese en quien, por carecer de licencia de conducir, le pide a otro que, si la tiene que conduzca un vehículo, sabiendo que es robado. ¿Podríamos afirmar que no lo tiene en su poder para efectos del tipo penal de la receptación? Categóricamente no. Incluso, en el ejemplo citado podría darse la situación de que sea el conductor quien no incurra en responsabilidad penal, precisamente, por desconocer que el vehículo es robado. Por lo tanto, la respuesta frente a la existencia o no de un porte penalmente relevante por parte de quien no está conduciendo en el preciso momento de la detención (pero que está al interior del vehículo) debe articularse a partir del contexto y de las particularidades fácticas del caso de que se trata. En el caso *sub lite*, resulta a todas luces evidente que Vargas Arias no sólo no podía menos que conocer el origen ilícito del vehículo en cuyo interior circulaba, sino que, además, lo tenía en su poder, con prescindencia de que no lo estuviera conduciendo en ese momento. La premisa deslizada por la defensa supone desconocer que el porte en los delitos de emprendimiento es un elemento que tiene también una dimensión normativa y funcional. Qué duda cabe que el copiloto del conductor de un vehículo robado es coautor de la receptación (al igual que quien va sentado atrás, para colocarnos en la hipótesis que plantea el acusado), **en la medida que conozca o no pueda menos que la especie ha sido previamente objeto de una sustracción antijurídica.** Existe en ese contexto (insistimos, habiendo dolo) un dominio del hecho, pues el agente podría no subirse al vehículo o, incluso, una vez en su interior, bajarse. Es decir, la presencia del acusado en el vehículo no fue de modo alguno una acción neutra. El emprendimiento, jurídicamente, viene dado por el hecho de que el sujeto contribuye, con su sola presencia al interior del vehículo, a una acción de porte, en la que funcionalmente tiene una participación evidente. Lo dicho se infiere de la propia descripción típica del delito de receptación al tenor del artículo 456 bis A del Código Penal, conforme al que *“El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato o sustracción de madera, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470, número 1°, las transporte, **compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas,** sufrirá la pena de presidio menor en*

cualquiera de sus grados y multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales". Es decir, el propio tipo penal prevé modalidades de comisión en las que, incluso, el autor no tiene en su poder ni bajo su esfera fáctica de custodia la especie, pues basta que compre, venda, comercialice, etc., el objeto de que se trate; actividades que evidentemente no se satisfacen necesariamente con la tenencia material del objeto. Tenencia que, por lo demás, en este caso sí operó. Piénsese en quien, teniendo a sabiendas en su poder un vehículo robado, le pide a otra persona que lo conduzca, pues carece de licencia para manejar o no sabe conducir. En tal hipótesis, incluso, podría darse la situación de que el conductor no cometa delito alguno si es que desconocía el origen ilícito del vehículo, no obstante, lo cual resultaría evidente que el copiloto es autor.

Para ir cerrando la valoración de la prueba de cargo, a propósito de lo precedentemente dicho en este motivo, la corroboración de las premisas fácticas de una hipótesis acusatoria supone que la prueba de cargo este desprovista de ripios, inconsistencias, vacíos, contradicciones relevantes que, (de no mediar explicaciones convincentes), afecten la coherencia y competencia epistémica del conjunto de las evidencias destinadas a acreditar más allá de toda duda razonable los hechos que configuran la acción penalmente relevante contenida en la acusación; exigencias ineludibles para que una sentencia condenatoria pueda satisfacer los requisitos de la regla del artículo 342 del Código Procesal Penal. Ello demanda que la corroboración más allá de toda duda razonable, entendida como suficiencia probatoria en el caso de una imputación criminal, ***deba exceder la simple valla de una sospecha, incluso, una de carácter vehemente, cuestión que se ha logrado por parte del Ministerio Público en este caso.*** Por lo mismo, en el contexto evidenciario descrito, las imprecisiones que la defensa atribuye al testigo Lagos Cádiz en el sentido de que éste dijo que el procedimiento fue el 3 de julio de 2022, en circunstancias de que el delito es del 3 de agosto de ese año, no resulta relevante, el su declaración reproduce el núcleo de los hechos imputados en todos sus extremos. Se trata de un olvido menor, periférico y carente de relevancia en la conformación del conjunto del acervo probatorio.

OCTAVO: Hecho acreditado y participación.

Que, conforme al mérito de la prueba valorada y los argumentos expuestos, el tribunal ha podido tener por acreditado los siguientes hechos o premisas fácticas:

1.- Que el día 03 de agosto de 2022, a las 22:35 horas aproximadamente en la vía pública en la intersección de calles Urmeneta con Lago Madeira en la comuna de Conchalí, el imputado JUAN LORENZO VARGAS ARIAS fue sorprendido por funcionarios de Carabineros mientras circulaba al interior, junto a otros tres sujetos, del vehículo Chevrolet color rojo, modelo Sail, placa patente CZWS-45, manteniéndolo en su poder

2.- Que dicho vehículo mantenía encargo vigente por robo con intimidación de fecha dos de agosto de 2022, asociado al encargo N° SEBV_202208_0543, de 2 de agosto de 2022; no pudiendo el acusado menos que conocer la circunstancia acerca del origen ilícito del automóvil que tenía en su poder.

Que, según lo ya latamente razonado en los motivos precedentes, tales hechos son constitutivos del delito de receptación de vehículo motorizado, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal, correspondiendo -

conforme a la prueba aludida y analizada en el motivo séptimo- participación en calidad de autor material directo al acusado **JUAN LORENZO VARGAS ARIAS**, conforme al artículo 15 número 1 del cuerpo legal aludido.

NOVENO: Estándar probatorio a la luz de la decisión condenatoria.

El estándar probatorio opera sobre la base de decidir fundadamente si, considerando la prueba y los elementos de juicio incorporados en el proceso penal, es posible o no justificar externamente la concurrencia de la hipótesis acusatoria o si, por el contrario, dichos datos probatorios resultan insuficientes para satisfacer el estándar establecido por el legislador en el artículo 340 del Código Procesal penal.

Dicha suficiencia probatoria, para probar la culpabilidad, debe satisfacer -siguiendo a Jordi Ferrer- dos condiciones conjuntamente: ***“1) La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas. 2) Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc”.*** (Ferrer Beltrán, Jordi, La Valoración Racional de la Prueba, Editorial Marcial Pons, pág. 147).

Por las razones expuestas y habiendo valorado la prueba incorporada al juicio de conformidad lo dispone el artículo 297 del Código Procesal Penal estos sentenciadores han podido arribar a la conclusión de que se han satisfecho las exigencias antes referidas, cumpliéndose con ello el estándar del artículo 340 del citado cuerpo legal en orden a que la decisión de condena satisfaga el umbral de una convicción, más allá de toda duda razonable, de que al acusado VARGAS ARIAS le ha cabido participación directa en los hechos penalmente relevantes contenidos en la acusación estatal.

DÉCIMO: Determinación de las pena y forma de cumplimiento.

Que, una vez verificada la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, el tribunal ha tenido las siguientes consideraciones para adoptar las penas que se imponen en esta sentencia:

- 1) Como primera cuestión, con relación a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, efectivamente concurre respecto del acusado la del artículo 11, número 9, del Código Penal, esto es, la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. En efecto, de la simple lectura de los fundamentos de esta sentencia es posible inferir que el acusado, con su declaración en el juicio, reconoce todos y cada uno de los elementos objetivos del delito (más allá del alcance jurídico que la defensa les haya dado a dichas afirmaciones o de algunas explicaciones inverosímiles del acusado), contribuyendo con ello a reducir el ámbito de la controversia a su mínima expresión. Por otro lado, tampoco se ha controvertido que, a la fecha de los hechos materia de la acusación, el acusado no tenía condenas por crimen o simple delito en su extracto de filiación, por lo que concurre también la circunstancia aminorante del artículo 11 número 6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior. Por lo mismo, el tribunal impondrá la pena en el umbral más bajo, dentro del marco rígido contemplado para este delito conforme lo dispone el artículo 449 del Código Penal, al tenor de la conminación legal abstracta del artículo del artículo 456 bis A, inciso tercero, del referido cuerpo legal.

- 2) Que la única discusión ha girado en torno a la posibilidad de concedérsele al acusado la pena sustitutiva de la libertad vigilada intensiva.
- 3) Como primera cuestión ha sido relevante tener a la vista el extracto de filiación del acusado vigente al día del juicio (incorporado por el fiscal), en el cual registra una condena de 21 de marzo de 2023, a la pena de 3 años y 1 día, por los delitos de robo en lugar habitado o destinado a la habitación y violación de morada, en causa RIT 126-2022, del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Los delitos contenidos en dicha sentencia fueron perpetrados el 6 de enero de 2023.
- 4) Del extracto de filiación antes aludido, es posible concluir que, si bien al 3 de agosto de 2022 (fecha de la comisión del delito en que recae esta sentencia), el acusado no registraba condenas pretéritas en su extracto de filiación, lo cierto es que el delito en la causa RIT 126-2022 fue cometido con anterioridad (6 de enero de 2023). Es decir, cuando el imputado cometió el delito por el cual se le está condenando en esta sentencia, ya había perpetrado un robo en lugar habitado en enero del mismo año, es decir, siete meses antes. La circunstancia de que ello no haya estado consignado en su extracto de filiación solo se debe a que, contingentemente, la causa RIT 126-2023 (delito de 6 de enero de 2022) se falló una vez que ya había cometido el ilícito de 3 de agosto de 2022.
- 5) Como puede advertirse, la controversia entonces no se relaciona con la concurrencia de los requisitos formales de la libertad vigilada intensiva, sino más bien, con las exigencias cualitativas del numeral segundo del artículo 15 de la ley 18216, a lo cual luego nos referiremos. En tal sentido, la fiscalía postula que la conducta pretérita del sentenciado (el delito de seis de enero de 2022) impediría que se verifique la exigencia de norma legal citada. La defensa a su turno sostiene que tal circunstancia en nada obsta a que al acusado se le pueda conceder la pena sustitutiva en cuestión, pues incluso -afirma- ambas causas pudieron haberse agrupado y, eventualmente, ser objeto de una unificación de penas. Además, la defensa acompañó un informe social del acusado practicado el 08 de febrero de 2022 por el perito Andrés Oyarce Miranda, en el cual, a propósito de la causa RIT 126-2022, concluye que *“Juan podría optar a los beneficios de pena sustitutiva, libertad vigilada intensiva, ya que no presenta características ligadas al descontrol de impulso, tampoco presenta manifestaciones comportamentales ligadas a la agresión, ni presenta características de personalidad antisocial”*.
- 6) Para resolver la cuestión planteada debe tenerse, primeramente, en consideración que los informes sociales como el antes referido, lejos de ser vinculantes, cumplen una función más bien orientativa. Por otro lado, se trata de un informe que, por evidentes razones de temporalidad, no pudo tener en consideración la nueva infracción penal perpetrada por el acusado el 3 de agosto de 2022, y que es aquella por la cual está siendo condenado en el caso *sub lite*.
- 7) A propósito de lo anterior, es pertinente recordar que el artículo quince bis de la ley 18.216, a propósito de la libertad vigilada intensiva, no sólo contiene exigencias formales u objetivas (letras a y b y numeral primero), sino también una de carácter más “cualitativa” que obliga a quien determina la forma de cumplimiento de la pena a realizar un ejercicio de ponderación en el caso concreto de que se trata, acerca

de la conveniencia o inconveniencia de otorgar la pena sustitutiva. En efecto, numeral segundo del artículo 15 de la citada ley dispone que para otorgar la pena sustitutiva en comento se exige que **“los antecedentes sociales y características de personalidad del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitieren concluir que una intervención individualizada de conformidad al artículo 16 de esta ley, parece eficaz en el caso específico, para su efectiva reinserción social”**. La regla reproducida supone entender que no basta la mera concurrencia formal de los requisitos objetivos en un caso en el cual el sentenciado tiene una condena pretérita por un delito que trae aparejada una conminación legal punitiva de crimen. Pero no sólo eso. Ese delito fue cometido apenas meses antes de aquel por el cual se le condena en esta sentencia y, cuestión no menor, en el primer delito (según se expuso en la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal) Gendarmería el 27 de abril de 2023 informó la presentación del sentenciado para cumplir la pena sustitutiva impuesta en la causa RIT 126-2022, la cual más encima se tuvo que suspender por haber sido el imputado detenido por un nuevo proceso que hoy lo tiene en prisión preventiva (causa RIT 2992-2023 del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago desde el 18 de julio de 2023).

- 8) Lo dicho incide directamente en la necesidad de considerar la conducta pretérita del sentenciado como parámetro relevante (aunque no único) que deben ser considerado. Por lo pronto, los antecedentes con que se cuenta permiten abrigar serias dudas acerca de la disposición del sentenciado para someterse a las cargas procesales inherentes a una pena sustitutiva de estas características, pues su reiterada actividad infractora de normas penales de cierta entidad en un acotado espacio de tiempo revela precisamente lo contrario. Ello no necesariamente obstará en todos los casos a la concesión de una pena sustitutiva. Sin embargo, la existencia de un hecho delictual previo y reciente al hecho punible (aun cuando por contingencias de temporalidad en la tramitación de las causas no haya estado consignado en el extracto de filiación a la fecha en que cometió el delito en que recae esta causa), a lo **menos imponen a la defensa la necesidad de derrotarlos mediante una carga argumentativa que pueda convencer al tribunal de que la pena sustitutiva constituirá en el caso concreto una incentivo eficaz para no perpetrar nuevos delitos en el futuro y, tan importante como aquello, para razonablemente anticipar que la pena será cumplida cabalmente. En el caso que nos convoca, el informe social aludido en este apartado no llega a satisfacer el requisito del numeral segundo del artículo 15 de la ley 18.216. Es importante tener en consideración que el citado numeral segundo, lejos de constituir una exigencia formal que pueda sin más ser soslayada, se sostiene en una prognosis que hace el tribunal, fundada esencialmente en consideraciones de prevención especial, esto es, en consideraciones acerca de la utilidad de la pena sustitutiva para la reinserción del condenado y para disuadir o precaver comportamientos futuros que infrinjan la ley penal**. Las consideraciones efectuadas permiten a estos jueces llegar al convencimiento de que en la especie el sentenciado no cumple con las exigencias requeridas para acceder al cumplimiento de la pena bajo la modalidad de la libertad vigilada intensiva. Ergo, se accederá a lo que pide el Ministerio Público en orden a imponer el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, con los abonos que se indicarán en la parte resolutive de esta sentencia.

9) No habiéndose opuesto el fiscal, la pena accesoria de multa será rebajada conforme al artículo 70 del Código Penal, teniendo en especial consideración que el acusado, debido al tiempo que lleva privado de libertad y el que deberá purgar, no estará en condiciones de generar ingresos.

10) Finalmente, se dispensará al acusado del pago de las costas, ya que al haber comparecido representado por la defensa penal pública. Es posible presumir su pobreza.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 11 N° 6 y 9, 14 N° 1, 15 N° 1, 24, 25, 26, 29, 49, 50, 70. 432, 436 inciso primero, 449 y 456 bis A del Código Penal; artículos 1, 14, 15 N° y 15 bis de la ley 18.216; y, artículos 4, 47, 295, 296, 297, 324, 340, 341, 342 y 344 del Código Procesal Penal se declara:

- I. Que se condena a **JUAN LORENZO VARGAS ARIAS**, ya individualizado. a la pena de **tres años y un día** (3 años y 1 día) de presidio menor en su grado máximo, como **AUTOR** del delito de **RECEPTACION DE VEHICULO MOTORIZADO**, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal, perpetrado el 3 de agosto de 2022 en la ciudad de Santiago, y a las penas accesorias de UN TERCIO de Unidad Tributaria Mensual, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.
- II. Que, no reuniéndose respecto del sentenciado los requisitos de la Ley N°18.216, éste deberá cumplir efectivamente la pena impuesta en un establecimiento penal.
- III. Que, para el cumplimiento de la sentencia, le servirá al sentenciado de abono el tiempo que ha estado privado en libertad con ocasión de esta causa, correspondiente al total de **(229)** días, en virtud de la detención del 4 de agosto de 2022 y el periodo que estuvo bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno (descontados los incumplimientos informados); ello, conforme a la certificación de efectuada por el jefe de la Unidad de Administración de Causas de este tribunal.
- IV. Que la pena de multa se sustituye en el acto por un día de reclusión, el cual se tendrá por cumplido en atención al día de detención que afectó al sentenciado el 3 de agosto de 2022 con ocasión de estos hechos.
- V. Que se exime al sentenciado del pago de las costas.

Ejecutoriado que sea el presente fallo y, en su oportunidad, remítase copia autorizada al Juzgado de Garantía de Santiago que corresponda.

Regístrese.

Redactó la sentencia el juez don **Eduardo Gallardo Frías**.

RUC: 2200751807-6

RIT: 2-2024

Código delito (869)

SENTENCIA PRONUNCIADA POR LA SALA DEL SEGUNDO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, INTEGRADA POR LA JUEZAS MARLENE LOBOS VARGAS Y MARCELA NILO LEYTON Y EL JUEZ EDUARDO GALLARDO FRIAS.

SE DEJA CONSTANCIA QUE NO FIRMA LA PRESENTE SENTENCIA, MAGISTRADO DOÑA MARLENE LOBOS VARGAS, PESE A HABER CONCURRIDO A LA DECISIÓN Y ACUERDO DEL FALLO, POR ENCONTRARSE HACIENDO USO DE PERMISO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 347 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES.